

por que a travésamos bajo el poder de los radicales. Y lo peor es que cuanto se les dice es inútil y vale tanto como echar margaritas a puercos.

Para que nuestros lectores puedan apreciar los levantados móviles que impulsan a los radicales por el camino de perdición que han señalado a la desgraciada patria que los abortó, tomamos el siguiente párrafo de *La Nación*:

«Decid, señores de la Liga, que la patria inspira vuestras protestas, que un sentimiento de españolismo da valor a vuestros clamores, que los buenos secundarán vuestros esfuerzos y que Dios es testigo de vuestra sinceridad; fingid cuanto queráis, no os tememos; ¿sabéis por qué? porque con vosotros y contra vosotros la historia se hará, y treinta mil esclavos ingresarán bien pronto en el respetabilísimo gremio de la iglesia de la libertad.»

¿Cuánta insensatez!

En prueba de que entre los que forman la *Liga nacional* no se alza otra bandera que la española; y que el espíritu de partido calla, cuando habla el amor a la patria común, he aquí la noble actitud de nuestro estimado colega republicano *El Pueblo* en la cuestión de las reformas de Puerto-Rico: «*about on cabinet*».

«Por eso queremos fijar de una vez y para siempre nuestras opiniones; por más que nuestra larga y probada carrera no haya sido otra cosa que su constante y serena confirmación. Queremos las reformas en Ultramar y queremos la abolición de la esclavitud, pero queremos que estas cuestiones, como toda medida de Gobierno, se estudie, se discuta, y se someta al voto soberano del país. Queremos que se tengan en cuenta los intereses creados, y que se escuchan los votos de la opinión pública cuando está alarmada. Queremos que se gobierne, y no que se grite; para que no se sobrepongan al país dos decenas de histriones ó de aduladores. Queremos, en una palabra, que la libertad se consolide y no que se pierda en las manos de los torpes ó de los imbeciles.»

En todas partes se levanta un grito de indignación contra las desastrosas reformas de Ultramar.

He aquí los términos enérgicos en que protesta la Bolsa de Barcelona:

«El profundo disgusto que así como en toda la Nación ha causado en Barcelona la funesta noticia de las reformas políticas y administrativas que el Gobierno intenta establecer en Puerto-Rico, se ha manifestado hábil y expreso y unánime por las numerosas personas que se reúnen en el local de la Bolsa, y representan a todas las clases de la sociedad. Los impulsos, pues, de un sentimiento espontáneo y altamente patriótico, sea del que se segremente anima a toda Cataluña, han acordado:

1.º Protestar solemnemente contra tales reformas, como atentatorias a la honra y a la integridad de la patria.

2.º Comprometerse, como se comprometen, a sacrificar sus personas y bienes para evitar, en el terreno de la legalidad y de la opinión pública, que se lleven a efecto.

Y 3.º Poner inmediatamente en conocimiento del Excmo. señor gobernador de la provincia este acuerdo, a fin de que se sirva transmitirlo por telegrama al Gobierno para que pueda apreciar el sentimiento general del país.—Barcelona 19 de Diciembre de 1872.—(Siguen las firmas.)»

León en La Iberia.

«Gustavo Colón descubrió las Américas. Otro Colón, duque de Veragua, vicepresidente del Congreso y descendiente directo de aquel insigne varón, votó en la sesión del sábado en favor de las reformas de Ultramar; que la mayoría de los españoles consideren funestas para la integridad de la patria. Un Colón arriesgó su vida para descubrir un nuevo mundo. Otro Colón apoya con su voto lo que la mayoría de la Nación cree que será causa de la pérdida de la América española.»

«Ay, si el primer Colón levantara la cabeza al ver esto! Ayer, como se había anunciado, se leyó en el Congreso el proyecto de ley aboliendo la esclavitud en Puerto-Rico, con cuya lectura el Gobierno, al par que lanza un reto a la inmensa mayoría de la Nación, que es opuesta a la oportunidad de esta medida, falta a sabiendas y de una manera clara y precisa al art. 108 de la Constitución.

Dice así este artículo:

«Las Cortes Constituyentes reorganizarán el sistema actual de gobierno de las provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba ó Puerto-Rico para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se creyeran necesarias, los derechos consignados en la Constitución.»

Como se ve las prescripciones de este artículo no pueden ser más claras. Las Cortes Constituyentes son las que, en ciertas condiciones, están autorizadas para llevar a cabo las reformas en Ultramar. Ahora bien: no teniendo el Parlamento actual la cualidad de Constituyente, no es posible abrigar la menor duda acerca de la ilegalidad con que se ha sometido la Constitución actual, es de la exclusiva competencia de las Cortes Constituyentes.

No siendo obligatoria disposición alguna que se oponga a lo que manda la Constitución, claro es que el proyecto presentado ayer en el Congreso, aunque las actuales Cortes lo aprueben, no obliga a la obediencia a persona alguna, porque no reúnen estas las condiciones requeridas para poderle dar fuerza de ley.

Véase, pues, hasta dónde llega la obediencia del Gobierno y hasta qué punto ciega el interés de partido, ó los compromisos contraídos, que no ha cesado en su empeño de proclamar la abolición inmediata de la esclavitud en Puerto-Rico, ni ante la idea de cometer una flagrante infracción de esa Constitución elaborada a gusto de los radicales, cuyo cumplimiento se pide a todas horas, y cuyo juramento se ha exigido a todas las clases que dependen directamente ó indirectamente del Estado, privando de sus haberes a los que no han consentido en prestar el juramento requerido.

Esta es vuestra conducta, señores radicales: falsear ó infringir la ley cuando lo tenéis por conveniente.

Dice un periódico que el Gobierno ha resuelto regular una espada de la fábrica de Toledo al presidente de los Estados Unidos.

Prescindiendo del mal ó buen efecto que pueda causar en los partidarios de la dignidad nacional y de la integridad del territorio esta prueba de cordialidad hacia un personaje a quien se atribuye una parte muy activa, ó por lo menos un gran deseo expresado en su último mensaje, en que se les lleven a cabo las reformas de Ultramar; prescindiendo de esto, repetimos, es la primera vez que el Gobierno de España

hace a un alto funcionario extranjero un regalo de esta especie.

Hasta ahora, cuando se ha querido manifestar simpatías ó amistad hacia una potencia extranjera, se ha conferido al jefe de la Nación una condecoración, una gran cruz, pero jamás una espada.

Sin duda los radicales, queriendo distinguirse en todo, y mucho más tratándose del presidente de los Estados Unidos, que tanto afecto profesa a nuestras provincias de Ultramar, tratan con este presente de nueva especie, de premiar los buenos consejos que tan cariñosamente como desinteresadamente han recibido del general Grant.

El siguiente suelto de *La Correspondencia* viene a confirmar los justísimos temores de cuántos creemos que las reformas de Ultramar han de producir en Cuba serios conflictos al Gobierno radical:

«Hoy se ha presentado al señor ministro de la Guerra el coronel Sr. Calleja, enviado del capitán general de Cuba, quien ha conferenciado largamente con el general Córdova sobre la situación que presenta aquella Antilla en estos momentos, que por cierto es en extremo imponente ante la perspectiva de las próximas reformas ultramarinas.»

La inmensa mayoría de la prensa de Madrid, sin más excepción que los periódicos radicales y los republicanos, ha hecho la declaración de que en presencia de las gravísimas circunstancias por que atraviesa el país, cesa en toda polémica de partido, para consagrarse exclusivamente, como españoles a sostener por todos los medios la integridad de la patria.

Nosotros nos adherimos a tan levantado y patriótico pensamiento, deseando, como nuestros colegas, no enervar las fuerzas que necesitamos para combatir al enemigo común y emplearlas todas en la defensa de la integridad nacional.

Debe haber trascendido hasta París el olor a difunto que exhala la situación radical, cuando nuestro embajador perpetuo del imperio y de la república se atreve a manifestar su opinión contraria a las reformas de Ultramar y hasta a indicar su propósito de abandonar su puesto.

Esta noticia ha circulado, añadiéndose que el Sr. Olózaga cree inminente la ruina del crédito de España en el extranjero, aun antes de que sea un hecho la pérdida de nuestras Antillas.

Esperamos que, si tal es la opinión del decano de la diplomacia progresista, la manifieste de una manera explícita para no dejar lugar a dudas sobre su modo de pensar en asunto tan trascendental.

De la segunda carta que un conservador dirige al Excmo. señor marqués de Dragonetti y que publica *El Diario Español*, tomamos los siguientes párrafos:

«El Rey ha visto de qué manera se ha sobreexaltado el espíritu público al iniciar una cuestión tan grave, las provincias envían comisiones para indicar su ánimo en contra de esta temeridad del Gobierno: los hombres más importantes, hasta los que son declaradamente antiradicales, no repugnan presentarse en el regío alcazar, para suplicar al Soberano: el comercio, la industria, lo más inteligente del pueblo y lo más distinguido de la sociedad y de la grandeza, se confunde en el mismo pensamiento y se anima por el mismo espíritu de protesta, y entre tanto, el Monarca desoyendo el clamor de todos, no sólo firma los decretos y autoriza los proyectos que pueden atentar a la integridad de la patria, sino que permite que el presidente de su Consejo de ministros declare en pleno Parlamento que el Rey desearía ardentemente la responsabilidad ante el país y ante la historia! Qué inmensa responsabilidad, si llegara un instante en que, como a principios del siglo actual, se perdiera para España lo poco que ya le queda en América! Pero es una responsabilidad que no puede hacerse efectiva, es una responsabilidad moral, que no cubre el perjuicio causado a la patria, de que nos serviría poco, lo que Dios no permita, después de perderse las Antillas, dijera el día de mañana la historia: «D. Amadeo de Saboya, tal vez sin advertirlo, de seguro sin desearlo, fué vergonzosamente el primer filibustero.»

«Ahí vos, señor marqués, y los demás distinguidos italianos que os acompañan, volvednos tranquilos a vuestra patria, al lado del duque de Aosta, porque en España, si hemos de creer a vuestro amigo, no hemos adquirido las salvajes pasiones de los indios, y no sabemos fusilar Monarcas, aunque alguna vez haya hecho el pueblo justicia de los favoritos. Pero aquí, se quedaban las provincias de Cataluña y de Castilla, con sus industrias y sus fábricas abandonadas, y aquí se quedaba el país con sus desdichas, después de haber pasado por la humillación de un dominio extranjero por la vergüenza de un descalabro presentado y por la ruina de sus más altos intereses. Ved, señor marqués, a lo que puede dar lugar la invertebración y la precipitación de un Monarca mal aconsejado.»

He aquí los términos en que *La Epoca* de anoche aprueba el preámbulo del proyecto de ley sobre la abolición de la esclavitud en Puerto-Rico, leído ayer en el Congreso, y que insertamos en otro lugar.

Las apreciaciones de *La Epoca*, como verán nuestros lectores, están de acuerdo con las que expresamos en nuestro primer artículo de fondo:

«El proyecto de ley sobre abolición inmediata de la esclavitud en Puerto-Rico, dice el colega, tiene un preámbulo expresamente consagrado a producir efecto. A este propósito, no solamente se ha invocado a Dios, a la justicia y a la humanidad, sino que se ha quecado por la solemnidad del día, expresando la coincidencia de ser sometido el proyecto a la aprobación de la Cámara el día en que la Iglesia, nuestra madre común, señala el nacimiento del Redentor y del que primero predicó la abolición de la esclavitud. Esto, como era natural, produjo grandes aplausos, incluso los del Sr. Suñer y Capdevila, cuyo catolicismo está tan bien probado.»

Antes de ayer han celebrado una larga conferencia con el ministro de Ultramar, Sr. Mosquera, el general Latorre y el Sr. Ayuso, secretario que fué del gobierno superior civil de Puerto-Rico, y se da mucha importancia a lo que en ella se dijo, y hasta se habla de protestas graves en ella emitidas, lo cual pudiera muy bien estar en consonancia con cierto rumor que circula.

Dícese, en efecto, que en círculos militares, agenos a la política, se agita el pensamiento de redactar una respetuosa exposición a las Cortes pintando las funestas consecuencias que han de tener para la causa de la integridad nacional las impremeditadas reformas que se pretende plantear en las Antillas. Esta exposición deberán firmarla todos los oficiales generales del ejército español, empezando por los que han desempeñado cargos importantes en las Antillas.

Las únicas noticias referentes a la insurrección carlista que hallamos en *La Correspondencia* son las siguientes:

«El brigadier Camus, con fecha de ayer tarde, comunica no existir partida alguna republicana en Sierra Morena, y que los fugitivos, ocultos en los caseríos, no ofrecen cuidado alguno.

«La facción Cuchala se dirige ayer a Fortanete, la de Polo a Cien-Torres, y Calasán a Ares. Con este motivo las columnas Castellón y las Parras marcharon inmediatamente a Cantavieja a batir a aquellas partidas.

«La facción Polo se subdividió ayer en pequeños grupos en las inmediaciones de Castellón. «La partida que vagaba por la provincia de Murcia, mandada por Galvez, ha sido sorprendida por las tropas, haciéndola cinco prisioneros, entre los cuales se encuentran un cuñado y dos hermanos del referido Galvez. Este ha podido huir, pero está gravemente herido.»

Insertamos a continuación el documento que ha dirigido al Centro Hispano-Ultramarino el Centro conservador constitucional de Palma de Mallorca:

«Excmo. señor presidente del Centro Hispano-Ultramarino.—Madrid.

«El centro conservador constitucional de esta capital tiene la honra de dirigirse al Centro Hispano-Ultramarino, que V. E. tan dignamente preside, para significarle que una voz a la de los leales habitantes de esta isla, protestando energicamente en nombre de la integridad nacional contra las reformas que trata de introducir el Gobierno en las posesiones de Ultramar.

«Los mallorquines en su inmensa mayoría no pueden ver con indiferencia la gravedad de las circunstancias actuales y por lo mismo se inspiran en los elevados sentimientos de que está poseído el pueblo español que defiende en estos momentos la santa causa de la justicia, que lo es al propio tiempo de la honra nacional. Firmes en su propósito los que suscriben, ofrecen su más decidido apoyo a la salvadora dignidad de nuestra patria iniciada con tan noble entusiasmo por ese Centro-Ultramarino. Palma 19 de Diciembre de 1872.—(Siguen las firmas.)»

El sábado terminó la Asamblea francesa la primera parte de la legislatura de 1872-1873. Como ocurre siempre en vísperas de unas vacaciones de cierta duración, la última sesión de la Cámara francesa fué literalmente de hielos: a pesar del número y del carácter de interés general de los proyectos de ley cuya discusión anunciaba la orden del día, dos horas bastaron a la Asamblea para agotar su programa. Entre las leyes votadas son las más importantes: una concediendo un crédito de un millón de francos para socorrer a los pueblos inundados; la abrogación en tercera lectura del decreto de 22 de Enero de 1852 relativo a los bienes de la familia de Orleans; y la reducción de seis a tres meses en el primer semestre de 1873 del tiempo de servicio que se exige a los soldados para poder ser nombrados cabos ó sargentos. El ministro de la Guerra demostró la necesidad de esta reducción momentánea, en atención a la escasez que hay en la actualidad, en el ejército francés de estas clases, visto lo cual el proyecto fué aprobado por unanimidad.

Al final de la sesión, M. Dreó puso sobre la mesa una proposición pidiendo el nombramiento de una comisión de información parlamentaria, compuesta de treinta diputados, que procurase «buscar entre los ciudadanos franceses, víctimas del golpe de Estado de 1852, pues los que «hayan sufrido perjuicios en su posición, en su fortuna, ó en sus medios de existencia tienen derecho a una indemnización.»

La Asamblea, procediendo en esto con notorio buen sentido, desechó la declaración de urgencia pedida por el autor de la anterior proposición.

La primera submisión de la comisión de los treinta volvió a reunirse el sábado, y el resultado de la reunión fué el que hacia presumir la sesión del día anterior, de que ayer dimos cuenta a nuestros lectores. Los individuos que la componen acabaron por reconocer la inutilidad de una discusión que no tiene base determinada hasta tanto que el Gobierno no haya formulado un programa de una manera precisa. En consecuencia, la primera submisión acordó que el presidente M. de Lavey se avisase con M. Thiers, y le pidiese día y hora para conferenciar con la submisión.

Es digno de llamar la atención un hecho que indica que la conciliación está próxima a traducirse en actos. La primera submisión no se ha limitado a transmitir a M. Thiers su deseo de conferenciar con él, sino que sabiendo que el presidente de la república debe pasar en el palacio del Eliseo en París las vacaciones de Navidad y de año nuevo, se ha manifestado dispuesto a reunirse en París en el caso de que M. Thiers así lo creyere conveniente.

Esta prueba de condescendencia extraordinaria tiene, a los ojos de la prensa francesa, grandísima importancia.

Asegúrase en París que M. Thiers, en vista de la impresión que ha causado tanto en Francia como en el extranjero la carta del duque de Gramont, de que ya tienen conocimiento nuestros lectores y de la importancia de este documento, le prepara una contestación.

Esta réplica no tendrá ni la forma de un discurso, ni de una carta emanada del presidente de la república francesa; sino que aparecerá en un folleto firmado por un antiguo diputado, que actualmente goza de gran favor en la presidencia, pero cuyo estilo es muy conocido en Francia.

La *Gaceta* de Francfort, con referencia a su correspondiente en Sigmaringen, dice que el príncipe real de Prusia ha dado recientemente una prueba de su profunda simpatía por los Jesuitas.

La víspera de su marcha formó grande empeño en tenerlos a su mesa, y al día siguiente fué en persona, acompañado de su esposa, a la residencia de los Jesuitas en Gorbun, donde permaneció una hora con ellos.

Parece que, si el mal tiempo no lo impide, M. Thiers proyecta un viaje a Calais para asistir a las pruebas que deben celebrarse de la clase de cañones de campaña que se adoptará para el ejército francés.

Con objeto de facilitar a los dueños de facturas de cupones del semestre que vence en 1.º de Enero próximos los medios de que puedan disponer de la tercera parte del importe que aquellos que, ha de satisfacerse en Diner consolidado al 3 por 100, con arreglo a la ley de 2 del corriente, independiente de las otras dos terceras partes que deben abonarse en

metálico, se ha dispuesto que se entreguen a los poseedores de dichas facturas, presentadas en las oficinas de la Deuda en Madrid, un documento provisional representativo del importe de la expedición de los cupones en la inteligencia de que aquellos interesados que deseen desde luego recibir estos documentos provisionales, lo manifestarán así por medio de un pedido impreso que se les facilitará por las mismas oficinas.

Ya ha ingresado en la Tesorería central, dice *La Correspondencia*, el importe del primer plazo de la suscripción empréstito de 1,000 millones, hecha en la misma.

Dice que va a darse nueva organización al cuerpo de orden público de Madrid.

«Para que, si de todos modos ha de ser en adelante lo mismo que es ahora?»

Dícese que el Banco hipotecario empezará a funcionar por principios de Febrero.

Parece que para la presidencia del Tribunal de Cuentas se piensa, en uno de los ministros actuales del mismo.

Así lo dice *La Correspondencia*.

El 31 del actual espira el plazo concedido para que los interesados en los bienes de capellanías, parroquias, etc., presenten a las administraciones económicas las solicitudes documentadas, a fin de que se declare la exención de los bienes de su dotación. Los inconvénientes que ofrece el estado de los archivos de donde se han de sacar los testimonios justificativos, hace que muchos interesados no hayan podido aducir su derecho, y se lamentan de que el Gobierno no les haya concedido nueva prórroga, no obstante que las dificultades que se presentan para adquirir dichos documentos, son muy grandes.

Tomamos de *La Correspondencia* de anoche: «Se han recibido en el ministerio de Hacienda las listas de la suscripción al empréstito, hechas en Amberes, Amsterdam, Francfort, Italia, y a la dirección del Tesoro se ocupa en hacer el prorrateo que se publicará en la *Gaceta*, como el de los demás puntos.»

Parece que se está firmando en Córdoba una carta dirigida al Centro Hispano-Americano, en la que muchas personas se adhieren al pensamiento de protestar contra las reformas ultramarinas.

ABOLICION DE LA ESCLAVITUD

El proyecto de ley sobre abolición de la esclavitud en Puerto-Rico, leído en el Congreso esta tarde, dice así:

«En nombre de Dios, y en respeto de la razón, de la moral, de la justicia, de la conveniencia pública y de la dignidad nacional, el Gobierno, cumpliendo la más sagrada de sus promesas, y el más humanitario de sus deberes, somete a la aprobación de las Cortes el proyecto de ley para la abolición de la esclavitud en la provincia de Puerto-Rico.

Realizados quedarán sus más vehementes deseos, como quedan satisfechos sus escrúpulos más delicados, si la insensatez de unos cuantos rebeldes no les impidiera dispensar a Cuba el mismo inapreciable beneficio, con las modificaciones que siempre aconsejaron respecto de ella la varia organización del trabajo en una y otra isla, la distinta densidad de su población, la enorme desigualdad en el número de sus esclavos, y las demás profundas diferencias de su respectivo estado social.

El Gobierno temería ofender la sabiduría de las Cortes si tratase de justificar ante ellas su generosa determinación. Desdichados de aquellos en quienes el silencio de la coincidencia haga necesario el frío lenguaje del raciocinio.

La abolición de la esclavitud, tan penoso como la conveniencia humana siempre como compañera inseparable de la justicia; pero el Gobierno debe proclamar en este solemne momento que, examinada la reforma bajo todos aspectos, sólo ha encontrado nuevas y poderosas razones, que, juntamente con su justicia, demuestran su necesidad y su oportunidad. La abolición gradual, que acaso algún día será la forma necesaria de la emancipación en Cuba, no ofrece ventaja alguna que la recomende en Puerto-Rico. Allí la población de origen africano es poco numerosa con relación a los habitantes de procedencia europea: así todos los negros han nacido en la isla: de los 31,000 que están en esclavitud, menos de 10,000, que no más de 3,000, son los únicos descendientes de las faenas del campo; los restantes viven en una especie de servidumbre doméstica, tan estrecha para el enriquecimiento de los dueños como favorable para la educación de los esclavos, ó dedicados a oficios mecánicos. Ningún peligro ofrecen, por tanto el número ni la calidad de los que en un día pueden pasar de la triste condición de cosas a la nobilísima condición de hombres libres.

Luzca, pues, esa día venturoso, y cumplo España la deuda de honor que tiene pendiente con la civilización moderna. Un acaso, que parece providencial, pone la presentación de este proyecto en el día consagrado por la cristianidad a conmemorar el nacimiento de Aquel que habia de trocar la faz del mundo, quebrantando las cadenas de todos los sirvientes y proclamando la igualdad de todos los hombres ante Dios.

Ayudemos a su obra, realizando un nuevo progreso en bien de la humanidad y en provecho de la patria. La esclavitud es una monstruosidad no menos funesta para quien la impone que para quien la sufre. Todos los grandes intereses humanos y patrióticos reclaman a voces su desaparición, que ha de reducir a un tiempo mismo en bien del redimido y en honra del libertador.

La reclama la religión, porque entre los hijos del Padre común no debe haber oprimidos ni opresores; reclama la moral, porque no hay acto meritorio donde no hay libre albedrío, y el alma del esclavo es casi siempre un recinto cerrado a toda idea de deber, a todo sentimiento de virtud; reclama la equidad, porque no hay injuria comparable a la mutilación de la entidad humana, en el más noble y esencial de sus atributos; reclama la utilidad, porque el trabajo del esclavo es el menos inteligente, el menos activo, el menos productivo; reclama el patriotismo, porque la patria y la flaqueza son el ordinario castigo de aquellos pueblos que, dormidos en la moliente, abandonan a manos esclavas las múltiples aplicaciones de su fuerza, eterna ley de nuestra dignidad, y eterno compañero de nuestra dignidad; la reclama la política, porque los hábitos domésticos tienen tan íntima conexión con las costumbres públicas, que allí donde gimen esclavos, difícilmente puede haber ciudadanos aptos para el aspero ejercicio de la libertad; reclama la prudencia, porque la insensatez prolongación de todo abuso hace más difícil su remedio y más violento su corrección; reclama, en fin, las necesidades del Gobierno, dado el sistema de nuestras instituciones representativas, porque en las Naciones libres no hay resistencia que prevalezca contra la fuerza de la opinión, y en España la opinión está, por fortuna, franca y resuelta.

La opinión está, por fortuna, franca y resuelta, cuyos supuestos beneficios se cifran en reducir a oro el sudor, el llanto, la sangre y el alma de una raza negra, condenada hasta aquí al látigo y a la cadena.

Fundado en tan altas consideraciones, el ministro que suscribe, de acuerdo con sus compañeros y previamente autorizado por S. M., tiene la honra que estima como la mayor de su vida de someter a la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1.º Queda totalmente abolida y para siempre la esclavitud en la provincia de Puerto-Rico. Los esclavos serán libres de hecho al finalizar los cuatro meses siguientes al de la publicación de esta ley en la *Gaceta oficial* de dicha provincia.

Artículo 2.º Los dueños de los esclavos emancipados serán indemnizados de su valor en el término expresado en el artículo precedente, conforme a las disposiciones de la presente ley.

Art. 3.º El impuesto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se fijará por el Gobierno, a propuesta de una comisión compuesta del gobernador superior civil de Puerto-Rico, presidente; del jefe económico de la provincia, del fiscal de la audiencia, de tres individuos nombrados por la Diputación provincial y otros tres designados por los dueños propietarios poseedores en la isla de mayor número de esclavos.

Los acuerdos de esta comisión se adoptarán por mayoría de sus individuos.

Art. 4.º De la cantidad que se fije para indemnización, se entregará el 80 por 100 a los dueños de los esclavos emancipados, mitad por cantidad del Estado y otra mitad por la de la provincia de Puerto-Rico, quedando a cargo de los mismos dueños el 20 por 100 restante.

Art. 5.º El Gobierno queda autorizado para arbitrar los recursos necesarios y adoptar cuantas disposiciones estime convenientes para el exacto cumplimiento de esta ley en el término fijado en los artículos 1.º y 2.º.

Madrid 23 de Diciembre de 1872.—El ministro de Ultramar, Tomás María Mosquera.

DOCUMENTO PARLAMENTARIO.

«*Abolición de la esclavitud y del ejército y abolición de las quintas.*»

Los diputados que suscriben, sintiendo discurrir del respetable dictamen de sus ilustrados compañeros en la comisión (de la abolición de quintas, por razones esenciales que en el curso del debate se expondrán, tienen el honor de presentar a la Cámara el siguiente:

«*VOTO PARTICULAR.*»

«Artículo 1.º La fuerza militar encargada de la defensa nacional se compondrá de ejército activo y reserva.

Art. 2.º Queda abolida la quinta para el reemplazo del ejército.

Art. 3.º El ejército activo, cuya fuerza se fijará anualmente según el precepto constitucional, se formará con soldados voluntarios.

Estos voluntarios serán retribuidos con una pensión diaria sobre su haber.

Gozarán de los beneficios expresados en el párrafo anterior, las clases de sargentos y cabos que deseen continuar en el servicio.

Art. 4.º La admisión de voluntarios se hará en los cuerpos de las diferentes armas ó institutos del ejército durante todo el año, con arreglo y bajo las bases que se establezcan en el reglamento.

Art. 5.º El Gobierno presentará a las Cortes, al principio de cada legislatura, noticia exacta por provincias y cuerpos del ejército, debidamente justificada, del número de voluntarios que en cada mes del año, vencido, hayan sido admitidos al enganche ó reclutamiento, así como el número de bajas ocurridas en cualquier concepto.

Art. 6.º El Gobierno cuidará de abrir ó cerrar en tiempo oportuno el ingreso de voluntarios en las filas del ejército, hasta alcanzar ó reducir su fuerza a la cifra votada por las Cortes.

Art. 7.º El tiempo del empeño será por lo menos de dos años para los enganchados y de uno para los reclutados. El Gobierno queda facultado para señalar mayor duración al compromiso, sin que nunca exceda de ocho años por cada vez.

Art. 8.º Los voluntarios, por su servicio, tendrán de tener por lo menos 19 años y no pasar de 40.

Ningún soldado permanecerá en las filas después de cumplidos 45 años, a menos que sus jefes no lo declaren apto para el servicio.

También se admitirán enganchados sin retribución desde la edad de 17 años, cuando los presentados tengan la suficiente robustez para el servicio.

Serán preferidos los que cuenten mayor número de años en el servicio, agregando los anteriores a los del último compromiso.

Art. 9.º Los voluntarios de todas las clases podrán elegir las armas a que deseen pertenecer, siempre que reúnan las condiciones que para cada una se exigirán y hubiese vacantes.

Art. 10. Queda abolida la talla. Para ser soldado basta acreditar la robustez necesaria para el servicio militar.

Art. 11. La reserva se formará con todos los mozos que hayan cumplido veinte años el día 1.º de Enero. El estado de la reserva será pasivo, y no podrá movilizarse sino por motivo de una ley, estando abiertas las Cortes, ó en virtud de decreto si estuviesen cerradas, dando después cuenta a las mismas. Cuando la movilización sea dentro de la provincia, bastará para verificarla el decreto del jefe militar.

Art. 12. No se admitirá la reducción al metálico ni la sustitución por el pase de la reserva al ejército activo.

Art. 13. El servicio de la reserva durará tres años.

Art. 14. Cuando el número de voluntarios no bastase para completar la fuerza del ejército activo señalado por las Cortes se cubrirá esta con el número de hombres necesarios pertenecientes a la reserva, repartidos entre el cuerpo entre todos los batallones que la constituyan. En este caso, el Gobierno, pedirá anualmente a las Cortes el número de hombres de la reserva que hayan de completar el ejército activo en la fuerza señalada.

Art. 15. El Gobierno, al distribuir en las filas el contingente de la reserva, procurará, en cuanto sea posible, destinar los hombres a cumplir su obligación en tiempo de paz en los cuerpos que guardaran las provincias de que sean naturales, ó a aquellas mas inmediatas.

Estos individuos disfrutarán también, como los voluntarios, una pensión diaria sobre el haber del soldado, desde el día que ingresen en el ejército activo.

Art. 16. El servicio de los soldados de la reserva en el ejército activo sólo durará dos años y podrán volver a sus casas antes de este plazo si hubiere voluntarios para completar la fuerza votada por las Cortes a media y en el número de los voluntarios que vayan ingresando.

Art. 17. Los soldados pertenecientes a la reserva están obligados, durante el tiempo que permanezcan en ella, a asistir en las épocas que designe a los ejercicios y asambleas que se establezcan hasta su completa instrucción, que recibirán en las capitales de provincia ó en los puntos donde resida el cuadro de los batallones ó escuadrones a que pertenecen.

Art. 18.º El Gobierno queda autorizado para formar el número de cuadros de batallones y escuadrones necesarios en donde hayan de ingresar los soldados de la reserva.

Art. 19. El Gobierno dará las órdenes convenientes para que los asistentes, escribientes y todas las clases de tropa, que en tiempo de paz, están obligados en las filas por razón de su destino, estén obligados al servicio de guardias y formaciones como los demás individuos de tropa, asistiendo precisamente a los ejercicios ó instrucción militar.

Art. 20. El Gobierno establecerá en los cuerpos del ejército las escuelas y academias necesarias para difundir la instrucción en la clase de tropa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.º Los voluntarios que actualmente sirvan en el ejército tendrán opción a los beneficios de la presente ley, cuando cumplan el empeño que tienen contraído.

2.º Quedan en su fuerza y vigor las disposiciones que rigen en la actualidad acerca de las exenciones físicas del servicio, menos la talla, así como las relativas al alistamiento, llamamientos, declaración de ingreso en las filas, disposiciones contra prófugos, reclamaciones contra los fallos de las diputaciones y demás procedimientos, en cuanto

SECCION OFICIAL

Gaceta de ayer.—Ayer se publicó el siguiente extracto de los despachos telegráficos recibidos en este ministerio hasta la madrugada de hoy.

Cataluña.—El brigadier Arrando sostuvo ayer una acción con todas las facciones reunidas de la provincia de Gerona, a las que batió, causándoles bastantes bajas.

El teniente coronel Pina atacó con su columna a las facciones reunidas de Córcega, Torres, Baidórra, Ferrer y Moliné, que en número de 400 hombres se hallaban en Oliva, desistiendo la continuación. El enemigo abandonó el pueblo, dejando en poder de la tropa 13 prisioneros, entre ellos el capitán Moliné y otros oficiales, causándoles 11 muertos, figurando en este número el capitán Cosco, y apoderándose además de 24 fusiles rayados y otras armas y efectos de guerra.

Provincias Vascongadas.—Perseguida por la columna Arana la partida de latro-faceros capitaneada por Soroceta, se le dio alcance desde Gortzeta a unos caseríos del monte Oyarzun. En la provincia de Vizcaya, según las últimas noticias, no quedan más que los dispersos de la partida Maidagan.

En el resto de la Península no ocurre novedad extraordinaria.

Por el ministerio de Estado se publica con fecha 23 de Diciembre sancionada la ley autorizando al Gobierno para proceder a la ratificación del tratado de comercio y de navegación, celebrado entre los reinos de España y de los Países Bajos en 18 de Noviembre del año próximo pasado.

Por decreto de 22 de Diciembre, expedido por el ministerio de Gracia y Justicia, se dispone lo siguiente:

Artículo 1.º La ley provisional de Enjuiciamiento criminal, que se publicó a continuación de este decreto, comenzará a regir desde el 15 de Enero próximo en la Península e islas Baleares y Canarias, con sujeción a las reglas siguientes:

Regla 1.ª Las causas por delitos cometidos con anterioridad al 15 de Septiembre de 1870 se sustanciarán con arreglo al procedimiento vigente en la actualidad.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, las causas en el mencionado se sustanciarán con arreglo al nuevo procedimiento, cuando concurren las circunstancias siguientes:

1.ª Que fuesen por delitos más graves que los correspondientes al procedimiento en vigor.

2.ª Que fuesen por delitos más graves que los correspondientes al procedimiento en vigor.

Regla 2.ª Que estén en suarrollo al 15 de Enero próximo.

Regla 3.ª Que todos los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 4.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 5.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 6.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 7.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 8.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 9.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 10.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 11.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 12.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 13.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 14.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 15.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 16.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 17.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 18.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 19.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 20.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 21.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 22.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 23.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 24.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 25.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 26.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 27.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 28.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 29.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 30.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 31.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 32.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 33.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 34.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 35.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 36.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 37.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 38.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 39.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 40.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 41.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 42.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 43.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 44.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 45.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 46.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 47.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 48.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 49.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 50.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 51.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 52.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 53.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 54.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 55.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 56.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 57.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 58.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 59.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 60.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

Regla 61.ª Que los procesos opten por el nuevo procedimiento.

episcopado y del clero de todos los países, que con el pueblo fiel defendan los derechos de la Iglesia.

Termina rogando a Dios que ayude a la Iglesia.

Habiendo de España, dice la ley sobre arreglo del clero en contravía a los Concordatos y a la jurisdicción y protesta contra esta ley.

El Papa ha preconizado once obispos, entre los cuales van tres españoles.

PARIS 23.—Un bando del gobernador militar de París prohíbe la publicación del periódico *Le Courrier*, como atentando a la Assemblée nacional.

En la Bolsa se han cotizado:

El empréstito a 86,85.

El 3 por 100 francés a 53,25.

El 5 por 100 idem a 84,52 1/2.

El exterior español a 24 1/16.

El exterior idem a 28 7/8.

LOANDEBES 23.—El exterior español a 28 3/4.

AMBERES 23.—El 3 por 100 español a 27 1/4.

El portugués a 41 1/4.

AMSTERDAM 23.—El 3 por 100 español a 27 1/4.

El portugués a 41 5/8.

MEXICO 22.—La inauguración del ferrocarril de Veracruz a México, tendrá lugar en los primeros días de Enero.

20 CORTES

CONGRESO

Extracto de la Sesión celebrada el día 24 de Diciembre de 1872.

PRESIDENCIA DEL SR. RIVERO.

Abierta la sesión a las dos y media, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Todos los ministros, excepto el general Górdova, ocuparon el banco azul.

El Sr. Jove y Herín pidió la lectura del art. 10 de la Constitución, según el cual los Cortes Constituyentes pueden reformar el sistema seguido en las Antillas.

El Sr. Jove y Herín no pudo hablar por impedimento del presidente.

El Sr. Zaldívar acordó a aquel diputado que tenía medios reglamentarios para usar de la palabra; y que el Gobierno estaba dispuesto a contestar a los amigos de la Liga.

El Sr. Jove y Herín, interponiendo al Gobierno, repitió que las reformas que se querían llevar a Puerto Rico no estaban conformes con la Constitución, y declaró que era la abolición de la esclavitud la que le parecía más importante.

El Sr. Mosquera contestó que veía con extrañeza los escrúpulos constitucionales del Sr. Jove y Herín, cuando el mismo artículo que mandó leer S. N. no tenía nada de común con la abolición de la esclavitud.

Dijo además que la cuestión se debía decidir de una manera prudente y meditada desde el 66, y que habían precedido al proyecto dos sesiones en las Cortes.

Rectificó el Sr. Jove y Herín, diciendo que el Sr. Lassala suplicó al ministro de Ultramar, que le pasara al Congreso los antecedentes que sobre las reformas en Ultramar hubiese en el ministerio, y así lo prometió el ministro.

El Sr. Rivero prometió también al Congreso que tendría cuidado de avisar a los diputados cuando llegase el expediente, porque el asunto era muy grave y conveniente que se estudiase.

El señor ministro de Ultramar subió a la tribuna y leyó el proyecto de ley.

Acto continuo se levantó la sesión.

Para la primera se avisará a domicilio.

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO PRIMERO.

De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas.

Artículo 1.º De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de lo suyo, reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.

Art. 2.º La acción penal es pública.

Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de esta ley.

Art. 3.º Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrá ejercitar la acción penal:

1.º El que no goce de la plenitud de sus derechos civiles.

2.º El que hubiese sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querrela calumniosa.

3.º El juez o magistrado.

Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes, o las de sus hijos, y por los comprendidos en los artículos 448, 452 y 456 del Código penal.

Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, no podrán ejercer la acción penal por los actos contra las personas de los otros.

Art. 4.º Las acciones penales que nacen de los delitos definidos en los artículos 458, 467 y 471 del Código penal, tampoco podrán ser ejercitadas más que por las personas a quienes correspondieren, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 463, 465 y segundo párrafo del 482 del mismo Código.

Tampoco podrán ser perseguidas más que por los ofendidos o por sus representantes legales las faltas comprendidas en los artículos 484, números 1.º y 2.º, 603, números 2.º, 3.º, 7.º y 8.º, y 695, número 1.º del Código penal.

Art. 5.º Los funcionarios del ministerio fiscal tendrán obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de esta ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, hasta el punto de particular en las causas, menos las acciones referidas en el artículo anterior y las procedentes de los delitos comprendidos en los artículos 448 y 452 del Código penal.

Sostendrán también las procedentes de los delitos definidos en los artículos 453, 460, 461 y 462 del Código penal en los casos expresados en los párrafos segundo y tercero del artículo 482 del mismo Código.

Art. 6.º La acción penal por delito o falta que lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.

Pero se extingue por esta causa las que nacen de delito o falta que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta que proceda.

Art. 7.º La renuncia de la persona ofendida no tiene efecto en el estado en que se hallare la causa, o ejercitara nuevamente los demás a quienes también correspondiere.

Art. 8.º Las acciones que nacen de un delito o falta podrán ejercitarse junta o separadamente.

Art. 9.º Ejercitadas sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, si no se acordó el perdón o la extinción de la acción penal, la cual se considerará extinguida si fuere renunciable.

Art. 10.º Podrán asimismo ejercitarse expresamente las acciones por una misma persona o por varias.

Pero no podrá ejercitarse la civil sino por el ministerio fiscal por daño causado al Estado o por los que hubiesen sido dañados o perjudicados por el de-

lito o falta, o por sus representantes o causahabientes.

Art. 12. Estando pendiente la acción penal no podrá ejercitarse separadamente la civil hasta que aquella haya sido resuelta por sentencia firme, pero el interesado podrá ejercitar en la causa hasta el trámite de calificación del delito inclusive la acción civil, si antes no la hubiere renunciado.

Art. 13. Pendiente la acción civil, podrá ejercitarse separadamente la penal: más en este caso se suspenderá el curso de aquella hasta que la penal sea resuelta por sentencia firme.

Art. 14. En ningún caso, será necesario, para el ejercicio de la acción penal, que haya precedido el de la civil, procedente del mismo delito o falta.

Art. 15. La extinción de la acción penal no llevará consigo la de la civil, a no ser que la extinción procediere de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho que la civil hubiese podido nacer.

En los demás casos, la persona a quien la acción civil correspondiere podrá ejercitarla en tiempo y forma contra quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido.

Art. 16. La extinción de la acción civil tampoco llevará consigo la de la penal que pida el mismo delito o falta.

Art. 17. La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil, no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

En este caso el juez o tribunal que de ella conociere apercibirá, según correspondiere, a la fuerza de las pruebas que se hubiesen practicado en el pleito civil, si se dieron nuevamente en el juicio criminal.

Art. 18. Los que fueren procesados en causa criminal tendrán derecho a ser representados por procurador y defensor por letrado.

Si no los nombraren por sí mismos, se les designará de oficio cuando lo solicitaren o cuando la causa hubiese llegado a estado en que fuese necesaria la intervención de aquellos funcionarios, o cuando el procesado intentare utilizar alguno que, por cuya interposición hubiere la misma necesidad.

Art. 19. El querrelante particular y el actor civil, si estuviere habilitado de pobres, tendrán también derecho a que se les nombren de oficio procurador y abogado para su representación y defensa.

Art. 20. Todos los que fueren partes en una causa criminal, que no estuviere declarados pobres, tendrán obligación de satisfacer los gastos de los procedimientos. Cuando los representantes, los abogados o los abogados que los defendan, y de los peritos que informen a su instancia, y las indemnizaciones de los testigos que declaren, también a su instancia, si éstos las hubiesen reclamado, y el juez o tribunal hubiese estimado la reclamación.

Pero si durante la causa no despusiere de terminada la causa, se considerará que las demandas, costas procesales, a no ser que a ello hubiesen sido condenados.

Art. 21. Se usará papel de oficio en los juicios sobre faltas y causas criminales, sin perjuicio del correspondiente reintegro, si hubiere condenación de costas.

Art. 22. Podrán ser habilitados como pobres:

Los que vivan de un jornal o salario eventual.

Los que vivan sólo de un salario permanente, de su sueldo, o de sueldo que sea su procedencia, que no exceda del doble jornal de un bracero en el pueblo cabeza del partido judicial del domicilio de los que solicitaren la habilitación.

Art. 23. Los que vivan de su propia industria, cultivo de tierras o de otros oficios, cuyo producto sea menor que el jornal de dos braceros en la cabeza del mismo partido judicial.

Los que vivan sólo del ejercicio de cualquiera profesión o industria o de los productos de cualquier comercio, por los cuales les corresponda pagar de contribución una cantidad inferior a la fijada en la tabla de las capitales de provincia de primera clase, 50 pesetas.

En las de segunda, 40.

En las de tercera y cuarta, 30.

En las de quinta y sexta, 20.

En los demás pueblos, 10.

Art. 24. Cuando el interesado alegare dos o más motivos de vivir de los designados en el artículo anterior, se computarán los rendimientos de todos ellos, y no podrá otorgarse la defensa por pobre si, reunidos, excedieren de las cuotas señaladas en el mismo artículo.

Art. 25. Los que hubiesen sido declarados pobres por sentencia firme, no podrán ser declarados por pobres, sino en los casos expresados en el artículo anterior, y en los que el juez o tribunal no los hubiese declarado por pobres, sino en los casos expresados en el artículo anterior, y en los que el juez o tribunal no los hubiese declarado por pobres, sino en los casos expresados en el artículo anterior.

Art. 26. Cuando la pretensión de pobreza se estableciera antes de empezarse el sumario, o hallándose éste pendiente, ante el juez de instrucción, será competente para conocer de ella el tribunal de partido que correspondiere a la circunscripción de aquel.

Si el sumario hubiese sido remitido al tribunal que hubiese de conocer de la causa, será este el competente para conocer de la pretensión de pobreza que se estableciera después.

Art. 27. La declaración de la pretensión de pobreza se hará en plaza separada, y acordada por los jueces o tribunales establecidos para el artículo de excepciones, y sin que por razón de su tramitación pueda dejar de principiarse o de continuarse la causa.

En este incidente, serán admisibles todos los medios de prueba que el tribunal considere pertinentes.

Art. 28. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá ser habilitado de pobre, sin necesidad de previa declaración de pobreza, el que alegare haber comprendido en alguno de los casos del art. 22, si a ello no se opusieren el ministerio fiscal y la parte con quien debiera sustentarse el incidente.

Art. 29. El que entablare la pretensión tendrá derecho a que desee luego se le otorguen los beneficios de la pobreza legal, sin perjuicio de lo que definitivamente se resolviera.

Art. 30. Cuando el interesado alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 31. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 32. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 33. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 34. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 35. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 36. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 37. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 38. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 39. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 40. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 41. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 42. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 43. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 44. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 45. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 46. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 47. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 48. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 49. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 50. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 51. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 52. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 53. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 54. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 55. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 56. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 57. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 58. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 59. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 60. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 61. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 62. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 63. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 64. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 65. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 66. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 67. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 68. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 69. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 70. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 71. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 72. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 73. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

Art. 74. El que alegare haber comprendido la pretensión, se suspenderá el incidente por citación y audiencia del procurador, si ya lo hubiere, o no estuviere en rebeldía, o no compareciera.

